

En la sesión extraordinaria efectuada el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo recaído a la consulta formulada por Paola Quevedo Arreaga, Secretaria de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, respecto al financiamiento público de dicho partido político.

ANTECEDENTES:

Escrito de consulta

I. El nueve de septiembre de dos mil veinte se recibió en este Instituto el escrito signado por Paola Quevedo Arreaga, Secretaria de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, mediante el cual formula una consulta en los siguientes términos:

«En el caso concreto actualmente el financiamiento se está remitiendo a una cuenta que manejan en el Comité Ejecutivo Nacional y el recurso no es bajado adecuadamente al Comité Ejecutivo Estatal, lo que ocasiona que no podamos llevar adecuadamente nuestras actividades, estructura, sueldos y salarios, además de que, en lo particular a mi se me está violentando mi derecho a ser votada en su vertiente a desempeñar el cargo de Secretaria de Arte y Cultura, puesto que para el correcto desempeño de mi secretaría necesito formar una estructura de Cultura y contratar un par de empleados, por lo que me surgen las siguientes dudas:

1. ¿Es correcto que el financiamiento local no se esté destinando para actividades ordinaria locales?
2. ¿Es correcto que el financiamiento local se remita al Comité Ejecutivo Nacional y éste último no lo baje al Comité Ejecutivo Estatal?
3. ¿Existe alguna forma o manera de que el financiamiento se entregue directamente al Comité Ejecutivo Estatal, y en su caso cual sería el procedimiento?
4. ¿El financiamiento se le puede entregar en cheque directamente a nuestro representante ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y en su caso cual sería el procedimiento?
5. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse para que por parte del partido se pague el sueldo de dos empleados para el correcto desempeño de mi Secretaría?

6. ¿Qué se debe de hacer si en el Comité Ejecutivo Nacional no destina casi nada del financiamiento local que le entregan al Comité Ejecutivo Estatal, lo que causa severos problemas de operatividad?
7. ¿Qué podemos hacer si el Comité Ejecutivo Nacional se niega a apoyarnos a los Comités Ejecutivos Estatales?
8. ¿Qué mecanismos existen para tener financiamiento local que se destine a las actividades locales y que estas no se vean paralizadas?»

CONSIDERANDO:

Personalidad jurídica del Instituto y principios que rigen su actuación

1. El artículo 77, párrafos primero y segundo, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, establece que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato* y la propia *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*. De igual manera, se señala que será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en materia electoral, en los términos que establecen los ordenamientos jurídicos antes citados y la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*.

Órgano superior de dirección

2. El artículo 81 de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

Integración del Consejo General

3. El artículo 82, párrafo primero, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, indica que el Consejo General se integra por un consejero presidente y seis consejeras y consejeros electorales, con derecho a voz y voto; la Secretaría Ejecutiva y representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz.

Atribución del Consejo General para desahogar consultas

4. De conformidad con el artículo 92 fracción XXVI de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, es atribución de este Consejo General desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicación e interpretación de dicho ordenamiento legal.

Incompetencia de este Consejo General para responder la consulta

5. Mediante el escrito referido en el antecedente I se advierte que la ciudadana Paola Quevedo Arreaga formula una consulta que esencialmente versa sobre:

- Destino y administración de importes correspondientes al financiamiento público del instituto político MORENA;
- Sujetos facultados para la entrega de financiamiento público y la forma en que ésta puede realizarse; y
- Manejo de financiamiento parte del Comité Ejecutivo Nacional y distribución de recursos a los comités ejecutivos estatales.

Así las cosas, conviene precisar que de conformidad con el artículo 77 de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, entre los principios que rigen la actuación de esta autoridad administrativa electoral, se encuentra el de legalidad, el cual ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la garantía formal para que las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. Lo anterior, al tenor de la jurisprudencia P./J. 144/2005¹, que se cita a continuación:

«FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias

¹ Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005.

al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.»

Así, el principio de legalidad se traduce en la obligación a cargo de la autoridad de aplicar estrictamente las disposiciones legales, sin restringir en forma indebida los derechos de quienes participan en el proceso electoral.

En este contexto, la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, cuya interpretación corresponde a esta autoridad electoral en términos del artículo 92 fracción XXVI del mismo ordenamiento legal, no contiene disposiciones que regulen el destino y administración del financiamiento público de partidos políticos; no se especifica quiénes son los sujetos facultados para la entrega de financiamiento público y la forma en que ésta puede realizarse; así como tampoco lo relativo al manejo de financiamiento parte de los órganos de dirección nacional de los partidos políticos con registro nacional.

Motivo por el cual, se considera que la respuesta a la consulta que nos ocupa no está comprendida en la competencia por materia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, aunado a que la misma tendría que emitirse con base en las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos empleados por partidos políticos, cuya interpretación corresponde al Instituto Nacional Electoral.

En efecto, de acuerdo con los artículos 7 párrafo 1 inciso d) y 8 párrafo 1 de la *Ley General de Partidos Políticos*; así como 190 párrafos 2 y 3 de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*; la fiscalización de las finanzas de los

partidos políticos se encuentra a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por conducto de su Comisión de Fiscalización y, para ello, contará con la Unidad Técnica de Fiscalización.

Asimismo, el artículo 196 párrafo 1 de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*, establece que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento.

Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 199 párrafo 1 inciso m) de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tiene entre sus facultades, la consistente en proporcionar orientación, asesoría y capacitación a los partidos políticos para el cumplimiento de sus obligaciones, con base en los criterios técnicos emitidos por la Comisión de Fiscalización.

También debe tomarse en consideración que el *Reglamento de Fiscalización* emitido por el Instituto Nacional Electoral, conforme a su artículo 1, tiene por objeto, entre otros, establecer las reglas relativas al sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos, sus coaliciones, candidaturas comunes y alianzas partidarias, las agrupaciones políticas y de las candidaturas a cargos de elección popular federal y local, incluyendo las inherentes al registro y comprobación de las operaciones de ingresos y egresos, así como la rendición de cuentas; siendo el caso que dicho ordenamiento regula la aplicación de los recursos provenientes del financiamiento público de partidos políticos.

Además de que conforme al artículo 2 del reglamento de mérito, la vigilancia respecto a su aplicación corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización con el apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Motivo por el cual, tomando en consideración que este Consejo General carece de atribuciones para interpretar disposiciones jurídicas relativas a la administración, aplicación y destino de los recursos públicos utilizados por los partidos políticos, se estima conveniente hacer del conocimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la consulta que motiva la emisión de este acuerdo, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, párrafos primero y segundo, 81 y 92 fracción II de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. En los términos precisados en el considerando **5**, se atiende el escrito recibido el nueve de septiembre de dos mil veinte en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, suscrito por Paola Quevedo Arreaga, Secretaria de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA.

SEGUNDO. Remítase copia certificada de este acuerdo y del escrito mediante el cual se realiza la consulta que motivó el mismo a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

TERCERO. Con copia certificada de este acuerdo notifíquese a Paola Quevedo Arreaga, Secretaria de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, en el domicilio señalado para tal efecto.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, firman este acuerdo el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la Secretaria Ejecutiva.